

POBOACIÓN E TERRITORIOS RURAIS

**Estudios en homenaxe a
Julio Hernández Borge e
José M. López Andión**

EDICIÓN A CARGO DE

Rubén Camilo Lois González

Francisco R. Durán Villa

Carlos Alberto Patiño Romarís

POBOACIÓN E TERRITORIOS RURAIS

**Estudios en homenaxe a
Julio Hernández Borge e José M. López Andión**

POBOACIÓN E TERRITORIOS RURAIS

**Estudios en homenaxe a
Julio Hernández Borge e José M. López Andión**



Edición a cargo de:
Rubén Camilo Lois González
Francisco Ramón Durán Villa
Carlos Alberto Patiño Romarís

Poboación e territorios rurais. Estudos en homenaxe a Julio Hernández Borge e José M. López Andión– Editado por Rubén Camilo Lois González, Francisco Ramón Durán Villa e Carlos Alberto Patiño Romarís – Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Grupo de Análise Territorial (ANTE) GI-1871, 2021.

ISBN: 978-84-09-37179-2

© Universidade de Santiago de Compostela, 2021

Publicado por:

Grupo de Análise Territorial (ANTE) GI-1871
Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia
Universidade de Santiago de Compostela (Campus Sur)
15782 Santiago de Compostela
<http://www.usc.es/ante>

Maquetación e impresión

Campus na nube

DL: C 2279-2021

ISBN: 978-84-09-37179-2

ÍNDICE

Poboación e territorios rurais. Estudos en homenaxe a Julio Hernández Borge e José M. López Andión.....	9
<i>Rubén C. Lois González, Francisco R. Durán Villa e Carlos Alberto Patiño Romarís</i>	
Recursos naturais, poboación e subsistemas económicos en Galicia.....	13
<i>Fernando González Laxe</i>	
Las Reservas de Biosfera de la región biogeográfica atlántica ibérica: Resiliencia demográfica y socioeconómica. Una aproximación metodológica.....	33
<i>Pedro Reques Velasco</i>	
Transformaciones demográficas y de la estructura territorial en la Montaña Palentina	45
<i>Juan Ignacio Plaza Gutiérrez e Erica Morales Prieto</i>	
Despoblación, envejecimiento y accesibilidad a servicios específicos para la tercera edad en la provincia de Granada	71
<i>José Antonio Nieto Calmaestra</i>	
LEADER y Subsidio de Desempleo Agrario ¿Políticas enfrentadas o complementarias a la hora de afrontar la despoblación en Andalucía?	85
<i>Eugenio Cejudo García, Francisco Navarro Valverde, José Antonio Cañete Pérez e Noelia Ruiz Moya</i>	
Propuestas desde el desarrollo rural para la Andalucía en riesgo extremo de despoblamiento. Entre la consideración y el olvido.....	109
<i>Francisco Antonio Navarro Valverde, Eugenio Cejudo García e Miguel Ángel García Arias</i>	
De la ciudad al campo: migraciones y/o movilidad residencial hacia zonas rurales en Aragón	127
<i>Raúl Lardiés Bosque</i>	
Despoblación y falta de servicios en los espacios rurales: La exclusión financiera en Aragón	143
<i>María del Pilar Alonso Logroño e Carlos López Escolano</i>	
Fluxos migratorios internacionais e patróns de localización espacial da poboación estranxeira nas cidades das Illes Balears: Palma e Eivissa	167
<i>Jesús M. González Pérez e Ismael Yrigoy Cadena</i>	
Desigualdades territoriais nos anos de recuperación: gañadores e perdedores entre 2014 e 2019	183
<i>Alejandro López González</i>	

Del vacío de la sierra al influjo de Madrid: despoblación y dinámicas demográficas en las comarcas y municipios de la provincia de Toledo.....	205
<i>Luis Alfonso Escudero Gómez e Ángel Raúl Ruiz Pulpón</i>	
A investigación española en xeodemografía. Algunhas cuestións a propósito da solicitude de proxectos e contratos ao Plan Estatal de I+D	223
<i>Rubén C. Lois González</i>	
Galicia: los territorios en riesgo de despoblación.....	235
<i>Francisco R. Durán Villa, María José Piñeira Martiñán e Ramón López Rodríguez</i>	
Poboamento e turismo residencial nos municipios litorais galegos	269
<i>Carlos Alberto Patiño Romarís</i>	
Asistencia familiar, dependencia e independencia durante la vejez en la Galicia rural, 1752-1869	299
<i>Isidro Dubert</i>	
As Reservas da Biosfera en Galicia, un instrumento contra o despoboamento?	311
<i>Alejandro Otero Varela, Roberto Vila Lage, Juan M. Trillo Santamaría e Valerià Paül</i>	
O ecoturismo e as súas potencialidades de desenvolvemento nos espazos rurais galegos en tempos de pandemia: o caso do Xeoparque Montañas do Courel ..	331
<i>Miguel Pazos Otón, María de los Ángeles Piñeiro Antelo e Lucrezia Lopez</i>	
La población del sector pesquero en Galicia. Tendencias e incertidumbres	351
<i>María de los Ángeles Piñeiro Antelo e Jesús Felicidades García</i>	
Retos e oportunidades do medio rural nun mundo pospandemia. Unha necesaria revisión curricular para o seu ensino no contexto da sociedade do coñecemento	371
<i>Franciso Xosé Armas Quintá, Xosé Carlos Macía Arce e Yamilé Pérez Guilarte</i>	
Abordar o despoboamento na Xeografía escolar desde unha perspectiva actual, crítica e contextualizada en Galicia.....	391
<i>Roberto García Morís e Yamilé Pérez Guilarte</i>	
Poboación e economía: o feito migratorio galego e o seu ensino nas aulas. Realidade, reflexións e propostas	407
<i>Uxío-Breogán Diéguez Cequiel</i>	
O envellecemento da poboación en Galicia: entre o decadentismo das políticas demográficas e a as tendencias observadas	417
<i>Antía Pérez Caramés</i>	

Despoblación y falta de servicios en los espacios rurales: la exclusión financiera en Aragón

María del Pilar Alonso Logroño
Universitat de Lleida
pilar.alonso@udl.cat

Carlos López Escolano
Universidad de Zaragoza
cle@unizar.es

1. Introducción

Desde hace varias décadas, la despoblación amenaza a muchos territorios del medio rural español como consecuencia del progresivo éxodo que lo caracteriza y que ha dejado amplios espacios con muy escasa población y, además, muy envejecida (Delgado Urrecho, 2018). Como es sabido, la pérdida demográfica del medio rural se ha concentrado en la población joven con capacidad de mantener o elevar la natalidad, que tiene como consecuencia directa el envejecimiento de la población que permanece en los espacios rurales así como la falta de relevo generacional y la capacidad de emprendimiento asociado a la escasa presencia de población joven. A su vez, el resultado de la despoblación del medio rural incide negativamente en la pérdida de calidad de vida de estos espacios, que cada vez presentan un número más reducido de los servicios esenciales para mantener vivos estos territorios (Escribano Pizarro, 2010). Son muchas las actividades terciarias, públicas y privadas, básicas y especializadas (comercios, farmacias, entidades financieras, escuelas, médicos, etc.), que han ido cerrando o reduciendo sus servicios en el medio rural ante la falta de efectivos demográficos acentuando los problemas de estos espacios (Corsino Reviriego Morcuende, Guerrero García, García Sáez y Martínez López, 2018) e incrementando los desequilibrios y la brecha urbano-rural. La pérdida de servicios públicos y privados retroalimenta asimismo un mayor deterioro de las posibilidades de desarrollo de los espacios rurales, ya que una provisión mínima de actividades y servicios es necesaria para la estabilización o atracción de habitantes (Escalona Orcao y Díez Cornago, 2005).

En este contexto, este trabajo analiza el caso del sector financiero en el medio rural, cuya provisión de servicios especializados resulta complicada ante los elevados costes. Por ello, este sector está aplicando una estrategia de repliegue de sus oficinas bancarias, lo que está provocando el cierre de sucursales en los municipios de menor población, dinámica que, sin embargo, también se da en los ámbitos urbanos. Específicamente, se analiza el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón en el periodo 2011-2020, donde muchos pequeños pueblos han perdido su única sucursal bancaria y carecen ahora de accesibilidad física a los servicios financieros, lo que contribuye a generar procesos de exclusión financiera de su población que ve limitado el acceso a cuestiones tan básicas como la obtención de dinero en efectivo. El acceso a los servicios financieros es una “condición necesaria para participar en la vida económica y social” (Bonilla Delgado y Martín López, 2016), y cuando esto no sucede por la falta de acceso espacial o por la brecha digital, podemos pensar que se generan procesos de exclusión financiera. Hay que tener en cuenta que los servicios bancarios se han convertido en un servicio esencial en

el funcionamiento de la actividad económica en general, pero también para las economías domésticas que centralizan la gestión del dinero desde el cobro de salarios y pensiones hasta el pago de los servicios básicos (vivienda, electricidad, gas, agua, telefonía, etc.).

El trabajo se organiza del siguiente modo: el apartado segundo aporta un breve cuerpo teórico sobre qué entendemos por exclusión financiera y cuáles son sus diferentes enfoques; seguido la sección tercera recapitula el proceso de reestructuración del sistema financiero español y la exclusión de la población de los servicios financieros en el medio rural para comprender las principales dinámicas e implicaciones territoriales de este proceso; a continuación la sección cuarta describe las fuentes estadísticas utilizadas y el método de trabajo empleado; la sección quinta presenta las principales cifras sobre la situación demográfica de Aragón para contextualizar las características del área de estudio; después el apartado sexto presenta los resultados obtenidos para el caso de estudio de la comunidad aragonesa sobre la reorganización de la actividad bancaria con especial atención a las consecuencias en el medio rural y, por último, se recogen las principales conclusiones.

2. *Acerca de los procesos de exclusión financiera*

Hablar de “exclusión financiera” es sumamente complejo ya que se trata de un concepto multidimensional que abarca un conjunto de barreras para acceder a los servicios financieros donde se debe distinguir entre “acceso” y “uso” (Mylonidis, Chletos y Barbagianni, 2019). De forma específica y detallada Anderloni, Bayot, Bledowski, Iwanicz-Drozowska y Kempson (2008) en su documento para la Comisión Europea se refieren al “proceso por el cual la gente encuentra dificultades en el acceso y/o uso de servicios y productos financieros en el mercado general, que sean apropiados a sus necesidades y les permitan llevar una vida social normal en la sociedad a la que pertenecen”. De acuerdo al Banco Mundial (2014), el acceso hace referencia esencialmente a la oferta de servicios financieros, mientras que el uso está determinado por la demanda y la oferta.

Por su parte, Mendizábal Zubeldia, Mitxeo Grajirena, Olasolo Sogorb y Zubia Zubiaurre (2008) definieron a la exclusión financiera “como aquella realidad derivada de los obstáculos con los que se encuentra la población al acceder y utilizar los servicios financieros”. Fernández Olit (2011) concreta un poco más y define la exclusión financiera territorial como la ausencia de servicios ofrecidos al menos por una sucursal bancaria en un municipio.

En este sentido, el trabajo realizado por Kempson y Whyley (1999) encontramos identificada la exclusión financiera en torno a cinco tipos de dimensiones:

- i. Exclusión en el acceso por evaluaciones de riesgo desfavorables o por cierre de oficinas. Se restringe el acceso buscando rentabilidad y seguridad, delimitan la población susceptible de formar parte de la cartera de clientes. Se produce exclusión geográfica por falta de proximidad de una entidad.
- ii. Exclusión ocasionada porque los productos financieros no están diseñados para sus necesidades.
- iii. Exclusión por precios, donde las personas no pueden afrontar las ofertas financieras cuando cambian las condiciones.
- iv. Exclusión por cuestiones de márketing y objetivos de ventas de las entidades.
- v. Exclusión voluntaria o “autoexclusión”. Existen muy diferentes motivos por los que se puede producir la autoexclusión, vinculada a las preferencias individuales o por normas culturales y religiosas.

Mendizábal et al. (2008) identifican también estas formas de exclusión y hablan de exclusión geográfica, en el acceso, en las condiciones, en lo comercial y autoexclusión. Enlazando con la última tipología, Llorente San Segundo (2019: 401-402) indica que, además de la «autoexclusión», hay dos grandes tipos de causas de exclusión financiera:

- i. La primera responde a hechos objetivos como el hecho de vivir aislado, residir en un núcleo sin sucursales bancarias, falta de cultura financiera o no tener acceso a las nuevas tecnologías.
- ii. La segunda obedece a criterios subjetivos de las entidades financieras basadas en circunstancias personales de los clientes: edad, enfermedad o discapacidad, situación laboral, origen, nivel de renta o historial crediticio.

A pesar de no ser un fenómeno nuevo, y como se ha descrito, no existe una definición generalmente aceptada y que incluya todas las posibles formas de exclusión financiera por la propia naturaleza multidimensional del problema y que ya ponía de manifiesto la definición aportada por Sinclair (2001): “*incapacidad de acceder a los servicios financieros básicos de una forma adecuada*”. Aunque la conceptualización e identificación de la exclusión financiera es compleja, desde la óptica geográfica puede abordarse, como se ha visto, a través de las dos tipologías establecidas por Llorente San Segundo (2019) donde se identifican la exclusión financiera que afecta a muchos espacios rurales -desde una dimensión de exclusión geográfica por falta de proximidad a oficinas-, como la autoexclusión por falta de formación en tecnologías. El cierre de oficinas bancarias en los espacios rurales coincide además, con cierta frecuencia, con la única entidad existente en ese municipio o núcleo de población, lo que desemboca en una mayor marginación y ruptura social de una parte de sus habitantes por los criterios más restrictivos y actitudes de la banca hacia los más vulnerables (Carbó Valverde y López del Paso, 2005; Honohan, 2008; Fernández Olit, Ruza, de la Cuesta-González y Matilla-García, 2019; Kamra y Uusitalo, 2019). La falta de la posibilidad de acceso físico a los servicios financieros es una de las cuestiones que contribuyen a la exclusión financiera (Leyshon y Thrift, 1995 y 1996), ya que aparecen territorios y grupos de población con problemas básicos como obtener dinero en efectivo o realizar pagos. De este modo, las personas de edad avanzada que no pueden hacer uso de los servicios digitales por no disponer de los medios y/o de las competencias digitales necesarias por la brecha tecnológica quedan excluidas del uso normal de la banca porque pierden la atención presencial (Maudos Villarroya, 2017; Jiménez Gonzalo y Tejero Sala, 2018). La red de sucursales físicas sigue siendo por este motivo un activo importante para la prestación de servicios financieros (Martin-Oliver, 2018), ya que la proximidad mejora el acceso a los servicios financieros al disminuir los costes de desplazamiento, además de crear redes de confianza entre las entidades y los clientes (Hauswald y Márquez, 2006), algo que en el medio rural todavía es muy importante al predominar las personas mayores y los negocios agrarios.

En este sentido, es por tanto necesario analizar el impacto que la reestructuración del sector está teniendo sobre la accesibilidad de la población rural a los servicios financieros, ya que la configuración de “desiertos bancarios” en muchos territorios puede reforzar procesos de exclusión (Leyshon, French y Signoretta, 2008) que acentúan la falta de atractivo para que se asiente población en el medio rural.

3. Reestructuración del sistema financiero y exclusión en los espacios rurales

La crisis iniciada en 2008 obligó a la banca española a realizar una profunda transformación para adaptar su capacidad a las demandas de solvencia que las administraciones imponían para garantizar su liquidez (Fuentelsaz, González y Palomas, 2016: 193). Esto llevó a una importante ola de fusiones y absorciones entre entidades financieras que todavía no ha finalizado y que ha provocado una reducción drástica del número de entidades. Entre 2008 y 2020 el cuerpo del sistema financiero español ha pasado de contar con 77 a 37 bancos, mientras que únicamente sobreviven 2 de las 48 cajas de ahorros, aunque varias de las supervivientes se engloban ahora entre los bancos (datos del segundo trimestre de 2020 del Boletín Estadístico del Banco de España). Esta reestructuración de entidades ha provocado a su vez una importante reorganización de la implantación territorial de sus oficinas (Alonso Logroño, Pueyo Campos, Postigo Vidal, López Escolano y Rubio Gracia, 2014), que ha derivado en el cierre de muchas sucursales para evitar duplicidades espaciales y ganar eficiencia y competitividad (Jiménez Gonzalo y Tejero Sala, 2018: 38). La reestructuración bancaria obliga a que las entidades bancarias estén reforzando los criterios de productividad para seleccionar el mercado a quien atender, para ello priorizan el perfil rentabilidad-riesgo (Fernández Olit, 2011). Entre los criterios que determinan la expansión territorial de las entidades destacan los espacios de mayores niveles de renta, con importante actividad y un elevado potencial demográfico (Carbó Valverde y López de Paso, 2002). Sin duda, amplias zonas como los espacios rurales no cumplen estas condiciones y, por ello, resulta importante un acercamiento al territorio que identifique mejor las causas y consecuencias de esta exclusión.

El fuerte repliegue de la red bancaria española desde finales de 2008 hasta 2020 ha cerrado más de 25.500 oficinas, y ha afectado tanto a las ciudades –donde ha sido más elevada la pérdida de oficinas en términos absolutos porque la red era más densa y presentaban mayores duplicidades de sucursales tras la integración de entidades- como a los espacios rurales –por la respuesta de las entidades ante la pérdida de población y la falta de clientes potenciales- (Jiménez Gonzalo y Tejero Sala, 2018: 43). Como consecuencia, en ambos tipos de espacios cada vez es mayor la población que tiene problemas de acceso a una sucursal física bancaria, pero sobre todo en los espacios rurales los efectos de la pérdida son mayores puesto que los cierres de estos servicios básicos acentúan la problemática del vaciamiento de la población.

En una primera fase, los mayores reajustes tuvieron lugar en las diferentes cajas de ahorros -aunque también entre los bancos-, que partían de unos tamaños financieros muy reducidos en la mayoría de casos, y donde las fusiones o absorciones con o entre otras entidades les permitieron ganar tamaño para ajustar la capacidad del sector, corregir los desequilibrios y mejorar su eficiencia tras un periodo de gran expansión (Alamá y Tortosa-Ausina, 2012). Este proceso ha sido posible por la “bancarización” de las cajas -conversión en bancos de estas entidades-, lo que ha supuesto perder parte de la filosofía fundacional de las cajas de ahorros como su finalidad social y su especialización en la financiación de las familias y las pequeñas y medianas empresas (RAE). Asimismo, su vocación geográfica circunscrita a sus territorios de origen también ha sido perdida una vez se han convertido en bancos y se han mezclado con otras entidades de todos los puntos de la geografía española, por lo que su papel territorial también se ha diluido con el tiempo (Poveda Anadón, 2017).

Anteriormente, el proceso de regresión demográfica del medio rural había potenciado el cierre de sucursales bancarias en estos espacios, pero es desde la crisis de 2008 cuando hemos asistido a un incremento de los mismos por el proceso de reestructuración bancaria. En los espacios rurales, las cajas de ahorros y cooperativas de crédito contaban con una mayor implantación territorial que los bancos por su vocación de atención rural y búsqueda de la proximidad a la población (Herrero Batalla y Teijeiro Pita da Veiga, 2012; Poveda Andón, 2017; Quintás Seoane, 2018; Arqué, 2019). Esta tipología de entidades había apostado por un acercamiento a sus clientes generando una amplia red de oficinas, especialmente en los pequeños municipios, ofreciendo ratios de sucursales por clientes muy bajas en las provincias más rurales de España, pero la reorganización que está afectando a este sector han conducido a la necesidad de optimizar sus servicios y buscar la eficiencia económica, lo que les lleva a cierres sistemáticos de oficinas en municipios que no son prioritarios.

Si bien reducir el exceso de capacidad es un elemento a favor de la viabilidad de las entidades financieras, para los clientes puede desembocar en procesos de marginación ya que los cierres de oficinas se llevan a cabo habitualmente atendiendo a criterios de rentabilidad sin ofrecer un equilibrio territorial (Delgado, Saurina y Townsend, 2008).

Al proceso de cierre de oficinas le acompaña un importante proceso de digitalización de los servicios bancarios (Hernando y Nieto, 2006), que también tiene como consecuencia el cierre de oficinas. El uso de la banca on-line es una de las apuestas principales del sector financiero en estos momentos, acelerado con la crisis del COVID-19, lo que sin duda está provocando un ajuste más profundo de oficinas físicas por parte de las entidades financieras (Alonso Logroño, López Escolano y Postigo Vidal, 2021). Aunque los servicios digitales pueden sustituir la falta de oficinas en el medio rural, en realidad muchos territorios rurales están incrementando la exclusión de la población a los servicios financieros por la brecha digital de los espacios rurales (Juliá Igual, García Martínez y Meliá Martí, 2006), así como por la falta de competencias digitales de la mayor parte de su población, muy envejecida (Maudos Villarroja, 2017; Jiménez Gonzalo y Tejero Sala, 2018).

Muchos de los negocios en el mundo rural tienen unas necesidades financieras diferenciadas de las ciudades que requieren una gran vinculación y fidelidad entre clientes y las entidades donde las relaciones personales son importantes (Demírguc-Kunt, Klapper y Singer, 2017). Los espacios rurales apoyados en estos sistemas de confianza pueden tener un atractivo para las entidades financieras, cuestión que han identificado las cooperativas de crédito o “cajas rurales” y otras entidades que siguen apostando por los espacios rurales más dinámicos con un modelo de especialización en el sector agrario, como las *Oficinas Agro* de Ibercaja o *AgroBank* de CaixaBank. Este tipo de entidades, con menores economías de escala y más vinculadas al territorio, están salvando a muchos territorios rurales con su presencia, beneficiándose del conocimiento de lo local.

La pérdida de oficinas ha provocado reivindicaciones por parte de la población rural que han llevado a plantear fórmulas para satisfacer las demandas de los servicios financieros más básicos, como la obtención de dinero en efectivo: la implantación de cajeros automáticos acompañados de cursos de capacitación para familiarizar con usos digitales; los “ofibus” o vehículos itinerantes que prestan servicios bancarios en distintos municipios para favorecer la cercanía al cliente; el establecimiento de agentes financieros que atienden a los clientes donde ya no existe oficina bancaria en determinados días y

horarios; la implicación de Correos o el uso de las tiendas de los pueblos para gestionar servicios de retirada e ingreso de dinero; o la habilitación de espacios comunes de servicios tipo coworking, entre otros (Jiménez Gonzalo y Tejero Sala 2018: 39).

A pesar de estas soluciones, el problema de la “desbancarización” del medio rural se ha acentuado. En 1998 en España, antes de la etapa de expansión en el crecimiento de oficinas de inicios del siglo XXI, el 40% de los municipios españoles no disponía ya de una sucursal bancaria (Carbó Valverde y López de Paso, 2002). El descenso de la población en los espacios rurales hacía que las oficinas dejaran de tener unos umbrales de clientes que garantizasen su rentabilidad. En 2009, el número de municipios sin sucursal aumentó hasta el 45% (Arqué, 2019) y en 2015 hasta el 48% (Maudos Villarroya, 2017: 286). De este modo, en 2015 un 2,4% de la población española no disponía de acceso físico a los servicios de una oficina bancaria en su lugar de residencia (Maudos Villarroya, 2017:286), proporción que aumentó al 2,7% a finales de 2016 (Jiménez Gonzalo y Tejero Sala, 2018: 43) y alcanzó el 2,9% en 2017 (IVIE, 2018), después de que más de 4.100 municipios vieran como cerraba su única entidad financiera. En concreto, el 50% de los municipios españoles no tenía en 2017 ninguna sucursal física según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), estando la mayoría de los cierres vinculados con las cajas de ahorro. En 2019 la proporción de municipios sin oficinas alcanzó el 52%, y en varias provincias más del 80% de sus municipios no disponían de sucursales bancarias (Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia o Soria) según datos de un informe del sindicato FINE (Federación Fuerza, Independencia y Empleo, sindicato del sector financiero). Este proceso es, lógicamente, más intenso en territorios y municipios con muy escasa población, siendo Castilla y León la comunidad autónoma donde más municipios no tienen ninguna oficina física seguida de Galicia, Castilla-La Mancha y Aragón según datos del Banco de España en 2020. Así, el 87% de los municipios menores de 500 habitantes no tienen oficina, cifra que se reduce al 41% en los municipios de 500 a 1.000 personas y al 17% en los de 1.000 a 2.000 habitantes.

En este contexto, el territorio aragonés ha sido también muy afectado por el proceso de reestructuración financiera. Las dos principales entidades regionales, Ibercaja y CAI -Caja de Ahorros de la Inmaculada-, contaban con una amplia presencia en el territorio rural, aunque la adquisición de CAI -que se había integrado anteriormente en el grupo bancario Caja3- por parte de Ibercaja en 2021 supuso cerrar un número importante de oficinas. Recientemente, las estrategias de digitalización y nuevas fusiones entre entidades bancarias están dejando a muchos municipios aragoneses sin sucursal bancaria. Se trata, por tanto, de mostrar un importante proceso de exclusión financiera en el medio rural aragonés cuyas consecuencias reflejan el crecimiento de la desigualdad espacial en el acceso a los servicios financieros, a la vez que contribuye a acentuar los problemas de despoblación que sufre esta comunidad.

4. Datos y métodos

La metodología seguida para analizar los efectos espaciales del proceso de reestructuración del sector financiero y sus implicaciones territoriales en el medio rural de Aragón se ha apoyado en los apartados teóricos y aplicados previos donde se ha revisado el concepto de exclusión financiera y algunas de consecuencias espaciales, así como explicado el proceso de reestructuración y reorganización espacial del sector financiero en España. La aproximación al estudio de la exclusión financiera a escala

regional (Aragón) se aborda mediante el análisis de diferentes datos estadísticos y la representación cartográfica de los resultados. En concreto, se han realizado los siguientes análisis:

- I. Estudio de las variables demográficas estructurales que permitan corroborar los problemas demográficos del territorio rural aragonés.
- II. Análisis de diferentes variables sobre la presencia de oficinas bancarias en Aragón, así como el estudio de la distribución espacial de oficinas bancarias en tres periodos diferentes: 2011, 2015 y 2020. Se identifican los municipios sin oficina bancaria y la ratio de habitantes por oficina.
- III. Análisis de la variación de la bancarización entre los distintos periodos comprendidos entre 2011, 2015 y 2020 para evidenciar los cambios en la variación de oficinas en los distintos territorios.

Cabe indicar que para aproximarnos a un estudio que permita mostrar la situación demográfica se ha acudido a las estadísticas disponibles en el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Respecto al análisis de las variables bancarias para mostrar la acentuación de los procesos de exclusión financiera en los espacios rurales se necesitan fuentes de información que permitan conocer a escala municipal la evolución de los cierres de oficinas bancarias (Alonso Logroño y López Escolano, 2021). Hasta 2012 contábamos con la base de *Datos Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales* de España difundida por *Caja España*, que recogía el número de oficinas bancarias de todos los municipios de España distinguiendo entre bancos y cajas de ahorro, fuente de la que se han tomado los datos de oficinas en Aragón en 2011. Para los datos más recientes disponemos del *Registro de Oficinas de Entidades Supervisadas*, elaborado por el Banco de España, donde se recoge una relación de todas las oficinas supervisadas por el Banco de España, con información trimestral desde 2015. En concreto se han tomado los datos para diciembre de 2015 y 2020. Toda esta información se ha georreferenciado a escala municipal sobre la base espacial de Aragón con la ubicación de oficinas en tres momentos de modo que permita reconstruir la trayectoria de los cierres de oficinas físicas acometidas en Aragón desde el año 2011 hasta 2020, con una valoración intermedia para 2015. La base de datos incorpora el código municipal para poder presentar agregaciones de datos geodemográficos, con lo que es posible diagnosticar la afección del cierre de oficinas para identificar patrones espaciales y áreas con situaciones de exclusión financiera.

Explorar todos estos aspectos, en la escala local y en áreas concretas, permite comprender mejor la lógica del comportamiento espacial del sistema financiero y mostrar los espacios que quedan sin oficina y, por tanto, excluidos de la prestación directa de los servicios financieros que atañe a más de la mitad de los municipios de la región aragonesa.

5. Aragón: una región con importantes desequilibrios demográficos

La Comunidad Autónoma de Aragón se caracteriza por sus grandes desequilibrios demográficos. Por una parte, es una región macrocéfala donde el municipio de Zaragoza, su capital, concentra el 54% de su población, que sumados a los municipios de más de 10.000 habitantes de la región supone que el 70% de la población esté concentrada en tan solo 14 de los 731 municipios que tiene la comunidad (Figuras 1 y 2). Frente a esta situación, existen 674 municipios con menos de 2.000 habitantes que reúnen el 15% de la población aragonesa. De estos últimos, 545 municipios (el 74%) tienen menos de 500

habitantes -reuniendo al 6,7% de la población- y 212 municipios (el 29%) tienen menos de 100 habitantes y tan solo suponen el 0,96% de la población total de Aragón.

Figura 1. Distribución del número de municipios según su tamaño en las provincias aragonesas, 2020. Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Explotación del padrón de población, 2021.

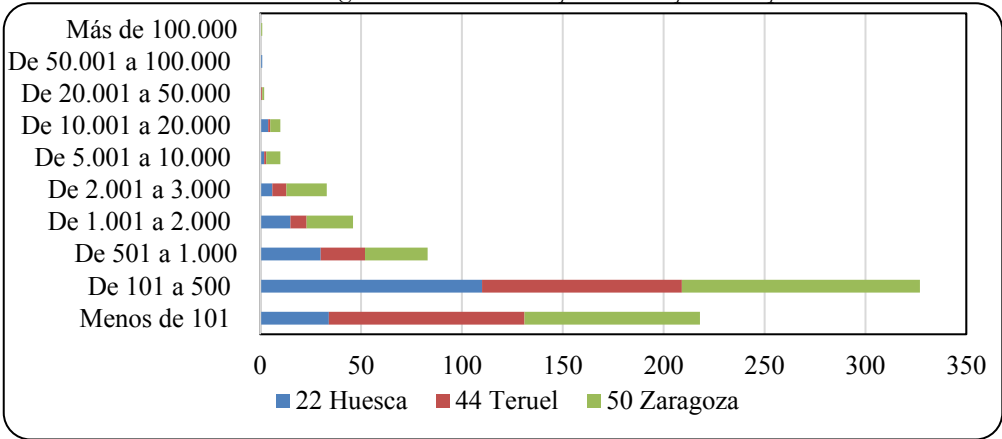
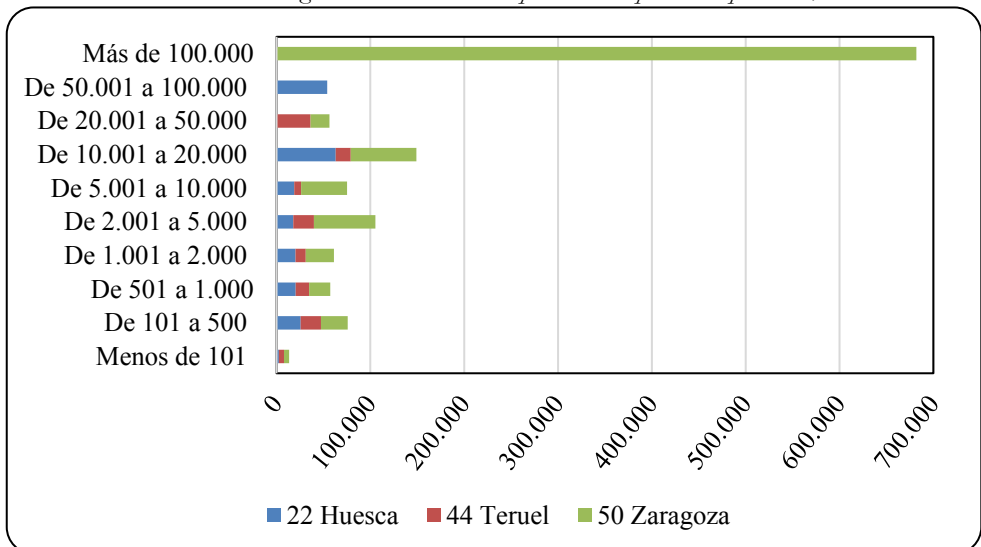


Figura 2. Distribución de la población aragonesa por provincias y tamaño de municipios, 2020. Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Explotación del padrón de población, 2021.

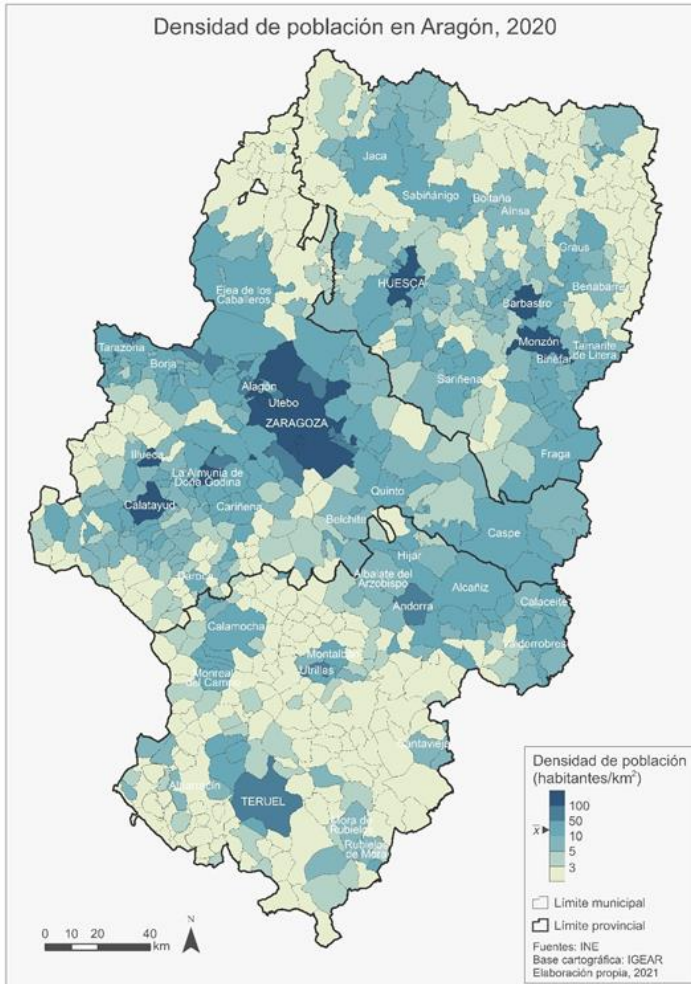


Por otra parte, predominan amplios espacios con muy baja densidad de población, como se aprecia en la Figura 3. La media de densidad de población de la región apenas llega a los 28 habitantes por km² en 2020, realidad que se agrava a escala provincial para

Huesca (14,2 hab./km²) y Teruel (9,1 hab./km²). Sin embargo, donde más problemas apreciamos es en aquellos municipios que no llegan a contar con densidades de siquiera 3 ó 5 hab./km². En concreto, el 72% de los municipios presentan densidades inferiores a los 10 hab./km², e incluso muchos de ellos -145 municipios- no superan los 2 hab./km², lo que permite calificar a una buena parte de la comunidad como auténtico “desierto demográfico”. Estos municipios se distribuyen en las tres provincias aragonesas, aunque son las zonas montañosas del área pirenaica (Ayuda Bosque y Pinilla Navarro, 2002) y de la ibérica las más afectadas (Pinilla Navarro, 2017),

Solamente un número escaso de municipios presentan densidades que sobrepasan los 100 hab./km², aunque a veces este dato se debe a su reducida superficie municipal y no por tener una población total más numerosa. En cualquier caso, el reparto demográfico es claro en la inmensa mayoría del territorio aragonés, donde apenas hay habitantes y la población se ha concentrado en unos pocos municipios, principalmente cabeceras comarcales, mientras que el resto del territorio presenta amplios espacios con muy poca población y bajísimas densidades.

Figura 3. Densidad de población en Aragón, 2020. Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Explotación del padrón de población. Elaboración propia.



A la problemática de la baja densidad y dispersión de la población se debe añadir las características de esta población, muy envejecida y especialmente sobre-envejecida la que habita en el medio rural (Figura 4).

Figura 4. Índices de envejecimiento (izq.) y sobreenvejecimiento (dch.) en Aragón, 2020. Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Explotación del padrón de población. Elaboración propia

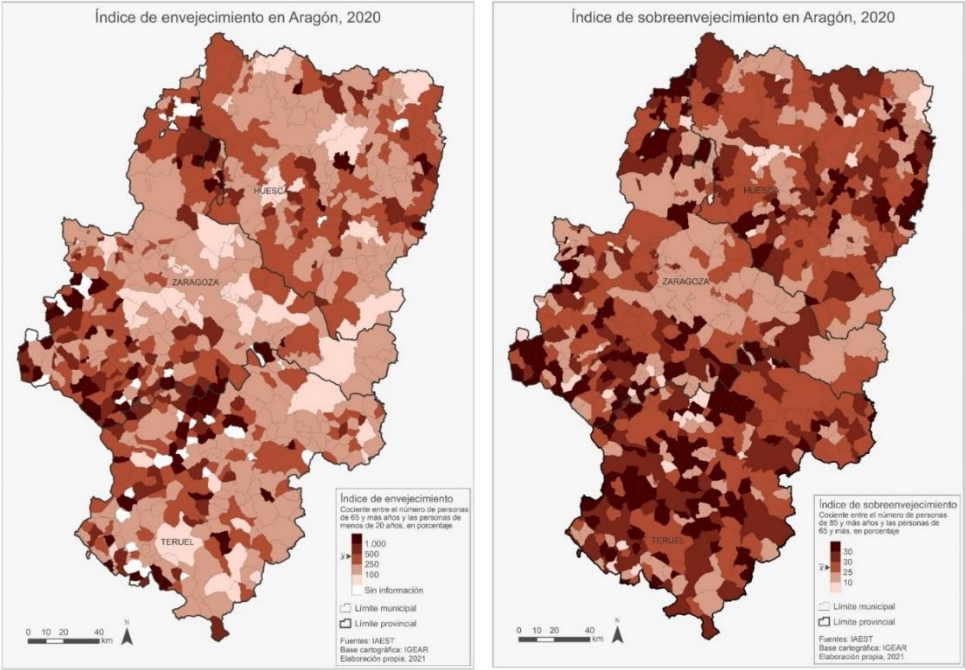


Tabla 1. Índice de envejecimiento y sobreenvejecimiento de Aragón, 2020.

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Explotación del padrón de población. Envejecimiento (Más de 64 años/ menor de 16). Sobreenvejecimiento (Más de 85/ más de 65).

Territorio	Envejecimiento	Sobreenvejecimiento
España	125,75	16,9
Aragón	145	20,0
Huesca	156,19	22,0
Teruel	175,91	24,5
Zaragoza	139,41	18,9

Aragón es la sexta comunidad autónoma por índice medio de envejecimiento -145-, donde sólo 52 de sus municipios están por debajo de 100, y otros 596 municipios están por encima de 145. Además, si observamos su índice de sobreenvejecimiento, la media de Aragón presenta un 20% de su población con más de más de 80 años (Tabla 1), lo que evidencia que se trata de una población muy mayor donde la capacidad de movilidad y de dinamismo son más escasas, por lo que precisan servicios básicos cerca de esta población porque las posibilidades de movilidad son menores. Observando este dato por municipios, 542 -el 74% del total- están por encima de la media de la región, cifras que marcan su alto grado de envejecimiento, que es especialmente acentuado en las provincias de Teruel y Huesca (Tabla 1).

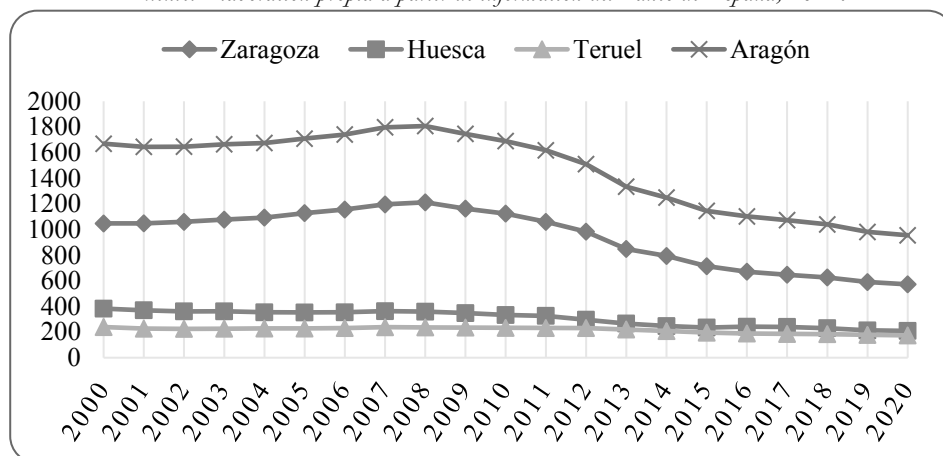
A esta situación de deterioro demográfico deben añadirse los problemas de falta de servicios básicos en los municipios más pequeños, que a medida que han ido perdiendo habitantes han ido desapareciendo, y cuyos habitantes deben buscar otras alternativas para satisfacer sus necesidades básicas. Un excelente ejemplo de cómo se acentúa este deterioro es el de los servicios bancarios, ya que desde la crisis de 2008 han emprendido una reestructuración que afecta de manera muy importante al deteriorado medio rural aragonés.

6. La exclusión física bancaria en el medio rural aragonés

Aragón comenzó el siglo XXI con una evolución positiva en el número de oficinas bancarias. Si en el año 2000 tenía un total de 1.664 oficinas, en 2008 tenía 143 oficinas más (Figura 5). Este aumento es debido, sobre todo, a la expansión de las cajas de ahorro y de las cooperativas de créditos, que abrieron nuevas oficinas acercándose a sus clientes en el territorio (Alonso Logroño y Pueyo Campos, 2012). Sin embargo, este crecimiento de la Comunidad Autónoma no fue igual en el conjunto del territorio. Las entidades financieras extendieron sus oficinas en especial en la provincia de Zaragoza, donde se abrieron 165 nuevas oficinas en el periodo 2000-2008. Frente a esto, en la de Huesca se perdieron 24 oficinas como fruto de la falta de rentabilidad ante el vaciamiento demográfico de la provincia, mientras que en el caso de Teruel se mantuvo el número de oficinas porque la falta de efectivos demográficos había configurado ya un espacio con escasas oficinas bancarias en los años anteriores. Así, mucho antes de que comenzase el siglo XXI, la provincia de Teruel ya luchaba por mantener su escaso peso demográfico y de ahí que el resultado es también la falta de una presencia bancaria anterior a 2008.

A partir de 2008 Aragón también empezó a sufrir los procesos de reestructuración financiera como el resto de España, dejando una importante huella que se traduce sobre los distintos territorios. La región, entre 2008 y 2020, ha perdido 852 oficinas bancarias, en un proceso todavía inconcluso ya que diversas entidades han anunciado próximos cierres en la Comunidad, la mayor parte en municipios rurales (El Periódico de Aragón, 2021).

*Figura 5. Evolución del número de oficinas bancarias en Aragón, 2000-2020.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco de España, 2021.*



Los mayores cierres se han registrado en la provincia de Zaragoza con 640 oficinas menos en 2020 respecto a 2008, es decir, ha perdido el 35% de las sucursales que había en la comunidad. En el mismo periodo Huesca ha perdido 150 oficinas (8%) y Teruel otras 62 sucursales (3,4%), con un balance para estos 12 años que supone una pérdida del 47% de oficinas bancarias en la región aragonesa y dejando consecuencias distintas según la tipología de territorios. Muchos de estos cierres se han centrado en las capitales provinciales y en los municipios más habitados, porque en estos espacios urbanos la política de acercamiento a los clientes había sido más fuerte en los comienzos del siglo XXI. Por ejemplo, las cajas de ahorro con una vinculación regional, Ibercaja y Caja de Ahorros de la Inmaculada, abrieron muchas oficinas incluso con una política de competencia en su localización entre ambas entidades (Alonso Logroño, Pueyo Campos, Postigo Vidal y López Escolano, 2014), lo que ha provocado que cuando la reestructuración ha obligado a la fusión entre entidades se hayan cerrado muchas oficinas; proceso que continuó después de las fusiones porque las entidades han emprendido una fuerte digitalización de sus actividades que favorece el cierre físico de más sucursales. Así, la ciudad de Zaragoza entre 2011 y 2020 ha perdido 383 oficinas, y el resto de municipios de su provincia han perdido 170 sucursales, siendo más sensible esta pérdida puesto que entre 2011 y 2020 hasta 37 municipios de la provincia se han quedado sin la presencia física de una oficina bancaria (Tabla 1). En el caso de la provincia de Huesca, la pérdida corresponde a 29 oficinas cerradas en la capital y 102 en el resto de municipios de la provincia, quedándose 15 pueblos más sin ninguna oficina. En la provincia de Teruel los cierres se corresponden con 12 en la ciudad y 31 en los pueblos de la provincia, aunque en este caso el número de municipios sin ninguna oficina se mantiene en número con 147 municipios sin ninguna oficina durante este periodo. En el caso de la provincia de Teruel el vaciamiento demográfico afecta de manera positiva a los indicadores de cobertura bancaria ya que si en 2011 eran 17.294 habitantes los que tenían que desplazarse

fuera de su municipio para realizar cualquier gestión bancaria, en 2020 son 13.503 personas (Tabla 2).

*Tabla 2. Ratio de habitantes/oficina y municipios sin oficina en Aragón, 2011-2020.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco de España,
Caja España, LAEST e IGEAR.*

Territorio	Variable	2011	2015	2020
Aragón	Número total de oficinas	1.686	1.192	959
	Ratio de habitantes/oficina	798,9	1.106,1	1.386,8
	Municipios sin oficina	381	409	430
	Población sin oficina en su municipio	52.978	58.873	58.820
	Extensión (km ²) de municipios sin oficina	14.446,7	15.637,5	16.747,0
Provincia de Huesca	Número total de oficinas	340	252	209
	Ratio de habitantes/oficina	673,0	886,3	1.067,3
	Municipios sin oficina	108	114	121
	Población sin oficina en su municipio	21.840	22.442	23.025
	Extensión (km ²) de municipios sin oficina	4898,3	5.161,3	5.688,0
Provincia de Zaragoza	Número total de oficinas	1.128	743	575
	Ratio de habitantes/oficina	862,9	1.286,7	1.691,4
	Municipios sin oficina	125	149	162
	Población sin oficina en su municipio	13.894	21.722	22.292
	Extensión (km ²) de municipios sin oficina	3.433,6	4.501,1	5.022,2
Provincia de Teruel	Número total de oficinas	218	197	175
	Ratio de habitantes/oficina	664,3	706,2	767,7
	Municipios sin oficina	148	146	147
	Población sin oficina en su municipio	17.244	14.709	13.503
	Extensión (km ²) de municipios sin oficina	6.114,8	5.975,1	6.036,8

Aunque la falta de servicios bancarios no es un problema nuevo para el territorio aragonés, ya que en 2008 el 50% de sus municipios no tenían ninguna oficina bancaria; la crisis de 2008, la progresiva pérdida de población en los municipios más pequeños y los procesos de digitalización siguen agravando este proceso. A finales de 2020 un total de 430 municipios aragoneses carecen de oficina bancaria, lo que supone que el 59% de sus municipios y el 4,4% de sus habitantes (58.820 personas) no disponen de este servicio en su lugar de residencia. En términos espaciales supone que en el 35% del territorio aragonés no hay ninguna sucursal. Observando estos datos por provincias apreciamos que son las provincias de Huesca y Teruel las que más problemas presentan. En la

provincia de Teruel, el 62% de sus municipios no tiene ninguna oficina, lo que supone el 41% de la superficie de la provincia, y afecta al 10% de sus habitantes. En Huesca, el 60% de sus municipios no tienen presencia física bancaria, lo que supone el 36% de la superficie de la provincia y afecta al 10,3% de su población. La provincia de Zaragoza, aunque en términos absolutos es la más afectada en los cierres recientes de sucursales bancarias por el elevado peso de la capital, en términos relativos supone el 55% de sus municipios sin oficina (29% de su superficie) y afecta al 2,3% de su población. Estos datos indican que la crisis de 2008 y los procesos de reestructuración financiera que acompañaron concentraron los principales ajustes en el número de oficinas bancarias en la provincia de Zaragoza, aunque sin embargo desde el punto de vista de municipios sin atención son las provincias de Huesca y Teruel las que más problemas presentan. Este hecho sin duda acentúa los problemas demográficos de estos espacios de la denominada “España vacía” (Del Molino, 2016). Además, los cierres de sucursales continuarán con especial incidencia en Aragón ya que Ibercaja, principal entidad de la región, ya ha anunciado nuevas oleadas de cierres de oficinas en municipios que se quedarán sin ninguna sucursal financiera: Fuendetodos, Jaraba (Zaragoza) y Blesa, Pancrudo, Fortanete y Bañón (Teruel) ya cerraron en febrero de 2021; mientras que Mara, Ambel, Alpartir, Biel (Zaragoza), Salas Altas (Huesca) y Torres de Albarracín, Vivel del Río, Vinaceite y Ferrerueta de Huerva (Teruel) lo harán en el mes de mayo de 2021. Esta decisión empresarial agravará el problema de la exclusión financiera en todas estas poblaciones, que se quedan sin uno de los servicios esenciales.

Descendiendo a escala municipal, si comparamos el número de oficinas de 2020 frente a las que había en 2011 (Figuras 6 y 7), se puede observar que el mayor número de cierres se concentra en municipios de la provincia de Zaragoza, en especial en el sur de la provincia en las comarcas de Campo de Daroca, Comunidad de Calatayud y Aranda, áreas muy poco densas y envejecidas (Figura 3). En la comarca Campo de Daroca, con 35 municipios, permanecen 8 oficinas bancarias abiertas en 4 municipios. La capital comarcal, Daroca, reúne 3 oficinas, 2 más en Villar de los Navarros, otras 2 en Villarreal de Huerva (que en mayo de 2021 perderá la oficina de Ibercaja) y 1 en Used. En cualquier caso, los datos de este ejemplo muestran que la reducida presencia de estos servicios está asociada a la escasez de clientes potenciales en la comarca, de tan solo 5.472 habitantes, con una densidad poblacional de 10 hab./km² y elevado envejecimiento, lo que ofrece una ratio de 684 habitantes por oficina. En cierta medida es una ratio muy baja, pero el problema está en que la población se encuentra muy dispersa por toda la comarca y, mayoritariamente, tiene que desplazarse para acceder hasta una oficina física. Esta situación de falta de este servicio básico agrava la situación de este territorio donde al problema de falta de habitantes se une la disminución de servicios básicos, cuestión de difícil solución donde las opciones de empleo de la banca digital también son complicadas por la elevada edad media de la población y los problemas de conectividad a las redes de telefonía móvil y Internet de alta velocidad.

La provincia de Huesca es la segunda más afectada en cuanto al número de municipios que se quedan sin sucursal bancaria. Diferentes comarcas ven cómo nuevos municipios se quedan sin oficina: La Ribagorza, La Litera, Sobrarbe o Los Monegros.

Un buen indicador para evaluar la relación entre bancarización y territorio es la ratio de habitantes por oficina bancaria. La media de este indicador en Aragón se ha elevado ligeramente entre 2011 y 2020 como consecuencia de los cierres de oficinas. Para la

primera fecha la ratio era de 798, mientras que en 2020 era de 1.369. Allí donde quedan oficinas en las zonas demográficamente más pobladas, como es la Ribera del Ebro, la ratio ha aumentado al disminuir el número total de oficinas. En la provincia de Teruel únicamente en la capital y en la comarca del Bajo Aragón (Alcañiz, Calanda o Alcorisa) superan los 1.000 habitantes por oficina frente al resto de la provincia que presenta ratios de menos de 500 habitantes por oficina, con muchos municipios incluso por debajo de las 250 personas por oficina, lo cual es una amenaza de cierre ante el escaso número de clientes potenciales. Sin embargo, la provincia de Teruel apenas ha sumado municipios que han perdido su única entidad bancaria entre 2011 y 2020. La explicación para que en muchos lugares con ratios tan bajas no hayan desaparecido las oficinas bancarias se debe a la presencia de entidades muy vinculadas con el territorio como es la Caja Rural de Teruel, que se ha mantenido una gran fidelidad y vocación con el desarrollo del territorio y ha logrado que, a pesar de la mala situación demográfica de la provincia, esta mantenga todavía unos valores de bancarización similares a los de los años de expansión previos a 2008.

Figura 6. Bancarización en Aragón, 2011. Fuente: Elaboración propia.

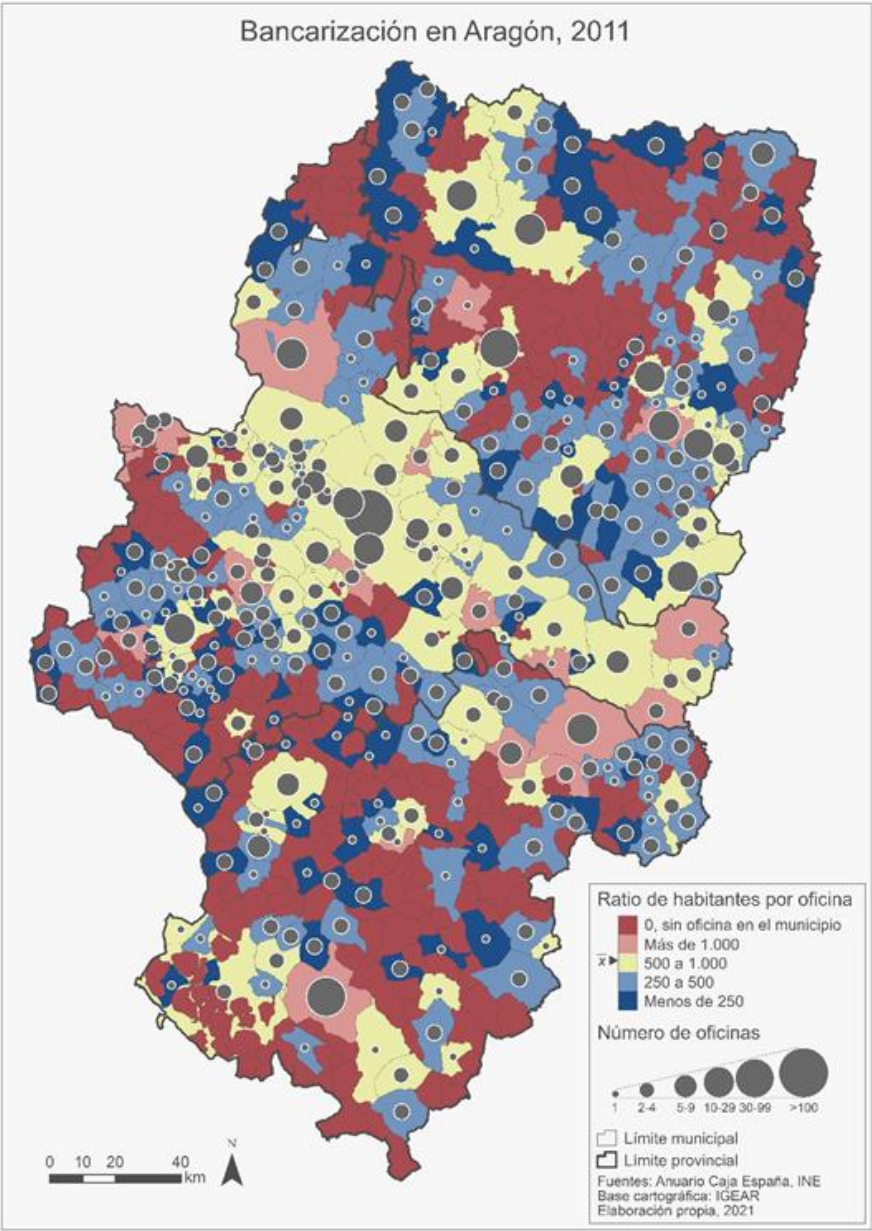
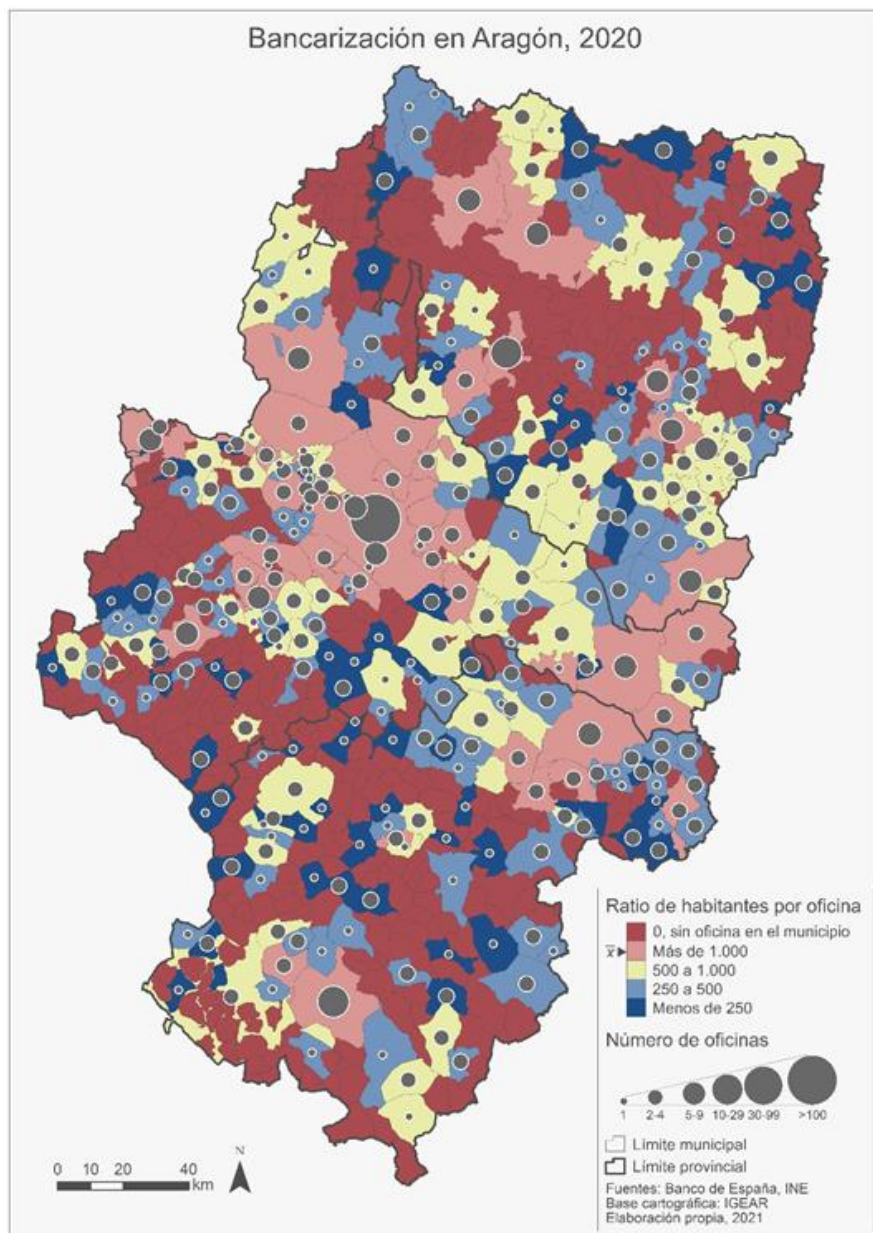


Figura 7. Bancarización en Aragón, 2020. Fuente: Elaboración propia.



El análisis realizado sobre el grado de cobertura de población con acceso a una oficina bancaria en su municipio muestra importantes problemas de exclusión financiera en los municipios aragoneses. En total, 58.820 habitantes no disponen en 2020 de oficina bancaria en su municipio, cifra que aumenta ligeramente respecto a 2011, con 52.978. Sin embargo, proporcionalmente supone poca población respecto al total de Aragón, aunque no por ello tiene que quedar excluida de tener un servicio básico. La situación por provincias muestra que más del 60% de municipios de la provincia de Teruel no tienen oficina bancaria y tienen que desplazarse a otros municipios para realizar actividades tan básicas como obtener dinero en efectivo; situación muy semejante a los datos de las provincias de Huesca (el 59% de sus municipios están en esta situación) y Zaragoza (el 50%).

La presencia de oficinas bancarias en el medio rural aragonés, particularmente en los municipios más pequeños, desarrolla una labor muy importante de asistencia al grueso de una población que se caracteriza por su alto grado de envejecimiento y sobreenviejimiento. Las entidades financieras desarrollan un papel de apoyo a la dinamización económica del territorio sin el cual difícilmente se puede salir de la situación de deterioro socioeconómico en el que se encuentra el espacio rural a pesar de los problemas que pueden presentar para la viabilidad del propio negocio bancario.

Además, los diferentes problemas existentes en torno a la brecha digital de gran parte de los municipios y de la población rural tampoco permiten implantar la banca digital como alternativa al cierre de oficinas físicas. Una buena parte de los pueblos de Aragón tiene unas deficientes conexiones telefónicas y acceso a internet muy precarios (Gobierno de Aragón, 2016), a lo que cabe añadir que el uso de los servicios digitales precisa de formación de las personas que viven en el medio rural que por razones de edad, principalmente, no pueden hacer uso de las mismas. Es por ello que se están ideando sistemas que permitan a estas poblaciones tener al menos un mínimo servicio para realizar actividades tan cotidianas como retirar dinero a través de convenios con Correos, comercios, farmacias o algún bar de las localidades; aunque a veces hasta esto resulta difícil por los problemas para digitalizar también de estos servicios o, incluso, por su ausencia en muchas localidades.

7. Conclusiones

La despoblación en los espacios rurales españoles es un problema que tiene consecuencias no solo demográficas sino también de índole económica y social. La falta de conexión a las redes de telecomunicaciones y la accesibilidad a servicios públicos y privados considerados básicos para el desarrollo de la vida cotidiana y de las actividades económicas es un problema que incide en la exclusión en el mundo rural. En una sociedad donde la transformación económica requiere una gran calidad y velocidad de las redes móviles para que las distintas actividades puedan desarrollarse con la misma calidad en los espacios urbanos y rurales, es un reto para estos últimos disponer de la conectividad que asegure su viabilidad económica y social evitando la brecha digital en el entorno rural. Si se quiere empezar a pensar en sacar al mundo rural de los problemas de despoblación que sufre, es necesario dotarlo de elementos que ayuden a mejorar su competitividad y eviten los desequilibrios para hacer que sean espacios más atractivos. Entre otros servicios, asegurar el uso de la banca online para la población y espacios rurales es básico ante la pérdida de acceso a oficinas bancarias que está golpeando el medio rural.

Este trabajo ha analizado el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, donde se ha visto que los procesos que han acompañado a la reestructuración de las entidades bancarias españolas han llevado a que el sector emprendiera una serie de ajustes que han tenido entre sus consecuencias la eliminación de muchas oficinas físicas. Ello supone que hay que replantearse temas como garantizar la accesibilidad a los servicios por parte de la población, especialmente en los espacios rurales donde la diversidad de oferta de entidades y la localización de entidades bancarias es cada vez menor, ya que sin este tipo de servicios los municipios rurales no tienen todas las condiciones necesarias para asegurar su desarrollo económico o mantenimiento poblacional.

En 2020, casi el 60% de los municipios aragoneses no dispone del servicio físico de una oficina bancaria, y si le sumamos los municipios que solo tienen una oficina y que, por tanto, no ofrecen alternativas de elección financiera entre entidades, suponen hasta el 75% de los municipios aragoneses. Esta situación se concentra mayoritariamente en los municipios más pequeños y con mayores niveles de envejecimiento y sobreenvejecimiento. La carencia de oficina bancaria deja sin un servicio básico a estas poblaciones para poder realizar sus actividades básicas como es disponer de dinero en efectivo o pagar gastos habituales. En el mismo sentido, la cada vez más escasa población activa de los espacios rurales aragoneses encuentra mayores dificultades para acceder a servicios financieros especializados que apoyen el emprendimiento de los negocios rurales, donde predomina el sector agrario cuyos modelos de negocio necesitan una proximidad física y una vinculación y fidelidad con las entidades bancarias donde, aunque se adapten a las nuevas tecnologías, las relaciones personales son importantes para la creación de redes de confianza con las entidades financieras. Por lo tanto, los espacios rurales apoyados en estos sistemas de confianza pueden tener un atractivo especial para algunas entidades financieras, cuestión que las cooperativas de crédito o cajas rurales reconocen desde siempre. Otras entidades, que no han desaparecido por completo del territorio rural, siguen apostando por esta tipología de espacios, haciendo uso de modelos especializados en el sector agrario y la atención a sus clientes de mayor edad. Este tipo de entidades, con menores economías de escala y más próximas al territorio por su vinculación territorial, son las que de momento están salvando a muchos territorios rurales de la plena exclusión financiera.

En definitiva, el acceso a los servicios financieros es una condición necesaria para el desarrollo socioeconómico de cualquier territorio, y cuando esto no sucede ni siquiera desde el punto espacial o por falta de formación digital, podemos pensar en que se generan procesos de exclusión financiera. Estos procesos se están gestando en especial en aquellas zonas rurales más despobladas y envejecidas, donde la exclusión se acentúa porque se están dejando amplios espacios sin una oficina física que cubra las carencias de la brecha digital o la distancia física. Este tipo de exclusión se centra sobre todo en los grupos de población y en los municipios más vulnerables ante las coberturas menguantes en los espacios más desfavorecidos. Si bien la banca digital podría suplir en parte estas carencias, aunque por el momento tampoco para todos los grupos de población, se requiere pensar con urgencia en modelos de ordenación territorial y de prestación de servicios básicos para la población y las empresas rurales que garanticen al menos la supervivencia del medio rural.

Bibliografía

- Ayuda Bosque, M. I. y Pinilla Navarro, V. J. (2002). El proceso de desertización demográfica de la montaña pirenaica en el largo plazo Aragón. *Ager*, 2, 101-138.
- Alamá, L. y Tortosa-Ausina, E. (2012). Bank branch geographic location pattern in Spain: some implications for financial exclusion. *Growth and Change*, 1 (43), 505-543.
- Alonso Logroño, M. P. y Pueyo Campos, Á. (2012). Efectos territoriales de la crisis financiera sobre las entidades bancarias: la fusión de las cajas de ahorro aragonesas. Trabajo presentado en las *V Jornadas del Grupo de Geografía Económica de la AGE*, Girona.
- Alonso Logroño, M. P., Pueyo Campos, Á., Postigo Vidal, R., López Escolano, C. y Rubio Gracia, J. L. (2014). La reestructuración del sector financiero. En J. M. Albertós, y J. L. Sánchez Hernández (Coords.), *Geografía de la crisis económica en España* (pp. 305-328). Valencia: Prensas de la Universitat de València.
- Alonso Logroño, M. P., Pueyo Campos, Á., Postigo Vidal R. y López Escolano, C. (2014). Los efectos territoriales de la crisis financiera en la implantación territorial de los servicios bancarios: el caso de la ciudad de Zaragoza. En J. M. Albertós, y J. L. Sánchez Hernández (Coords.), *Geografía de la crisis económica en España* (pp. 411-433). Valencia: Prensas de la Universitat de València.
- Alonso Logroño, M. P., López Escolano, C. y Postigo Vidal, R. (2021). Cobertura y accesibilidad a los servicios bancarios en España a escala urbana tras la Gran Recesión. *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 67(3), 1-30. En prensa, <https://doi.org/10.5565/rev/dag.657>
- Alonso Logroño, M. P. y López Escolano, C. (mayo, 2021). Las fuentes de información para el estudio de las actividades bancarias en España. En C. Gago, J. Córdoba, M. P. Alonso, R. M. Jordá, y J. Ventura (Eds.), *Una perspectiva integrada: aportaciones desde las geografías económicas, regional y de los servicios para la cohesión y la competitividad territorial* (6-12). Madrid: Asociación Española de Geografía.
- Anderloni, L., Bayot, B., Bledowski, P., Iwanicz-Drozowska, M. y Kempson, E. (2008). *Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion*. Brussels: European Commission.
- Arqué, G. (2019). *El papel de las oficinas rurales en la inclusión financiera*. CaixaBank Research. Recuperado de <https://www.caixabankresearch.com/es/analisis-sectorial/agroalimentario/papel-oficinas-rurales-inclusion-financiera>
- Banco Mundial (2014). *Financial Inclusion, Global Financial Development Report*.
- Bonilla Delgado, M. I. y Martín López, C. (2016). Políticas de inclusión financiera y social: la educación financiera. Trabajo presentando en el *VI Congreso Red Española de Políticas Sociales. Pactar el futuro, Debate para un nuevo consenso en torno al bienestar*, Sevilla. Recuperado de https://www.sis.net/documentos/Path/Políticas_europeas_de_inclusion_financier a.pdf
- Carbó Valverde, S. y López del Paso, R. (2002). La inclusión financiera: un paso cualitativo más. *Cuadernos de Información Económica*, 170, 79-90.
- Carbó Valverde, S. y López del Paso, R. (2005). La exclusión financiera. Un panorama. *Perspectivas del sistema financiero*, 84, 1-12.

- Corsino Reviriego Morcuende, A., Guerrero García, F. J., García Sáez, F. y Martínez López, J. (Coords.) (2018). *Pérdida de servicios básicos en el medio rural y despoblación. El medio rural y sus oficinas de farmacia*. Sociedad Española de Farmacia Rural. Sefar. Recuperado de <https://sefar.org.es/wp-content/uploads/2018/06/perdida-de-servicios-en-el-medio-rural-el-medio-rural-y-sus-oficinas-de-farmacia.pdf>
- Jiménez Gonzalo, C. y Tejero Sala, H. (2018). Cierre de oficinas bancarias y acceso al efectivo en España. *Revista de Estabilidad Financiera*, 34, 35-57.
- Del Molino, S. (2016). *La España vacía. Viaje por un país que nunca fue*. Madrid: Turner.
- Delgado, J., Saurina, J. y Townsend, R. (2008). Estrategias de expansión de las entidades de depósito españolas. Una primera aproximación descriptiva. *Revista de Estabilidad Financiera*, 15, 99-117.
- Delgado Urrecho, J. M. (2018). Más allá del tópico de la España vacía. En A. Blanco, A. Chueca, J. A. López-Ruiz, y S. Mora (Coords). *Informe España 2018* (pp. 232-295). Salamanca: Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro, Madrid: Universidad Pontificia Comillas, Cátedra José María Martín Patino.
- Demirguc-Kunt, A., Klapper, L. y Singer, D. (2017). Financial Inclusion and Inclusive Growth: A Review of Recent Empirical Evidence. *Policy Research Working Paper*, 8040. World Bank, Washington, DC. World Bank. Recuperado de <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26479>
- El Periódico de Aragón (1 de abril de 2021). Ibercaja cerrará 37 oficinas en abril y mayo, 20 en Aragón. *El Periódico de Aragón*. Recuperado de <https://www.elperiodicodearagon.com/economia/2021/04/01/ibercaja-cerrara-37-oficinas-abril-46447781.html>
- Escalona Orcao, A. I. y Díez Cornago, C. (2005). Retos y problemas de la accesibilidad a servicios en zonas despobladas: un caso en la provincia de Teruel (España). *Scripta Nova*, 9(188), 181-204.
- Escribano Pizarro, J. (2010). *El papel de los servicios públicos en el desarrollo de áreas rurales: una perspectiva comparada* (Tesis doctoral). Universitat de València.
- Fernández Olit, B. (2011). La exclusión financiera en los municipios españoles desde una perspectiva territorial. *Cuadernos de Información Económica*, 224, 125-136.
- Fernández-Olit, B., Ruza, C., de la Cuesta-González, M. y Matilla-García, M. (2019). Banks and Financial Discrimination: What Can Be Learnt from the Spanish Experience?. *Journal of Consumer Policy*, 42, 303–323.
- Fuentelsaz, L., González, M. y Palomas, S. (2016). La reestructuración de la red de oficinas en la banca española durante la crisis. *Cuadernos Económicos de ICE*, 92, 175-198.
- Gobierno de Aragón (2016). *Directriz especial de política demográfica y contra la despoblación*. Tomo I. Memoria. Páginas 107 a 111.
- Hauswald, R. y Márquez, R. (2006). Competition and strategic information acquisition in credit markets. *Review of Financial Studies*, 19 (3), 967-1.000.
- Hernando, I. y Nieto, M. J. (2006). Is the Internet delivery cannel changing banks' performance? The case of Spanish banks. *Journal of Banking & Finance*, 31(4), 1083-1099.
- Herrero Batalla, T. y Tejeiro Pita da Veiga, L. (2013). Las Cajas de Ahorros en el marco de la crisis. Funcas, *Perspectivas del sistema financiero español*, 106, 1-8.

- Honohan, P. (2008). Cross-country variation in household access to financial services. *Journal of Banking & Finance*, 32, 2493-250.
- Juliá Igual, J., García Martínez, G. y Meliá Martí, E. (2006). Internet, cooperativismo agrario y desarrollo rural. El caso de las cooperativas de la Comunidad Valenciana. *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 55, 221-251.
- Kamran, S. y Uusitalo, O. (2019). Banks' unfairness and the vulnerability of low-income unbanked consumers. *Service Industries Journal*, 39(1), 65-85.
- Kempson, E. y Whyley, C. (1999). *Kept in or Opted Out? Understanding and Combating Financial Exclusion*. Bristol: Policy Press.
- Leyshon, A. y Thrift, N. (1995). Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and the United States. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 20(3), 312-341.
- Leyshon, A. y Thrift, N. (1996). Financial exclusion and the shifting boundaries of the financial systems. *Environment and Planning A*, 28, 1150-1156.
- Leyshon, A., French, S. y Signoretta, P. (2008). Financial exclusion and the geography of bank and building society branch closure in Britain. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 33, 447-465.
- Llorente San Segundo, I. (2019). Exclusión financiera e igualdad de trato en el acceso a servicios bancarios. *Revista de Derecho Civil*, 6(1), 399-443.
- Maudos Villarroya, J. (2017). El acceso a los servicios bancarios en España. El impacto de la reducción del número de oficinas. *Mediterráneo Económico*, 29, 265-286.
- Martin-Oliver, A. (2018). Financial exclusion and branch closures after the Great Recession. *Regional Studies*, 53(4), 562-573.
- Mendizábal Zubeldia, A., Mitxeo Grajarena, J., Olasolo Sogorb, A. y Zubia Zubiaurre, M. (2008). Análisis de las causas y consecuencias de la exclusión financiera. Trabajo presentado en *Global Conference on Business and Finance Proceedings, Volumen 3*, 277-280. The Institute for Business and Finance Research. Recuperado de <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.459.3142&rep=rep1&type=pdf#page=292>
- Mylonidis, N., Chletsos, M. y Barbagianni, V. (2019). Financial exclusion in the USA: Looking beyond demographics. *Journal of Financial Stability*, 40, 144-158.
- Peñas Moyano, M. J. (2011). La privatización de las cajas de ahorros y el papel de la comisión de obra social. *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 70, 209-226.
- Pinilla Navarro, V. J. (2017). El largo declive demográfico de Teruel. *Turolenses*, 10, 27-30.
- Poveda Anadón, R. (2017). La muerte de las cajas de ahorros. *Temas para el debate*, 273-274.
- Quintás-Seoane, J. R. (2018). Cajas de Ahorros españolas: Crónica de una muerte súbita (The Spanish Savings and Loan Sector, Chronicle of a Sudden Death). *SSRN, January 10, 2018*. Recuperado de <https://ssrn.com/abstract=3501638>
- Sinclair, S. (2001). Financial Exclusion: An Introductory Survey. Centre for Research in Socially Inclusive Services (CRISIS), Heriot-Watt University, Edinburgh.